JUZGADO CUARENTA LABORAL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., septiembre seis (06) de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Acción de tutela promovida por el señor Pedro Antonio Castellanos Rodríguez contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-. Radicado 2021-00268-00.

Agotado el trámite del asunto, y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el despacho a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

ANTECEDENTES

DERECHOS INVOCADOS: Solicita el actor que se le ampare su derecho fundamental de petición.

PERSONA O ENTIDAD CONTRA LA QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- Gerencia de Determinación de derechos y Dirección de Prestaciones Económicas.

PRETENSIÓN: Ordenar a Colpensiones dar respuesta de fondo a la solicitud de cumplimiento de sentencia elevada por intermedio de apoderado judicial el pasado 22 de abril de 2021 con número de radicado 2021_4637529 (pág. 5 y 6, pdf. 003).

HECHOS RELEVANTES: Como fundamento del amparo constitucional, en síntesis, se relacionaron los siguientes:

1. El accionante informa que mediante sentencia del 29 de junio de 2018, proferida por el juzgado 49 administrativo del circuito de Bogotá, modificada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda - Subsección F, se condenó a Colpensiones a la reliquidación de su pensión de vejez (pág. 8 a 47, pdf. 003).
2. Indica que el pasado 22 de abril de 2021 presentó derecho de petición con número de radicado 2021_4637529, solicitando el cumplimiento de la sentencia antes referenciada (pág. 5 y 6, pdf. 003).
3. Afirma que a la fecha de la presentación del amparo constitucional, la Administradora Colombia de Pensiones no ha emitido respuesta de fondo a su petición.

TRÁMITE PROCESAL

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 31 de agosto de 2021 (archivo pdf 005 del expediente digital) y fue notificada a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- Gerencia de Determinación de derechos y Dirección de Prestaciones Económicas, en debida forma tal y como consta en archivos pdf 007 a 009 del expediente digital; de otra parte, se comunicó la existencia de la presente acción constitucional a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- (pdf. 006).

CONTESTACIÓN:

La Administradora Colombia de Pensiones -Colpensiones- rindió informe el 03 de septiembre de 2021 por intermedio de la Dirección de Acciones Constitucionales, en los siguientes términos (pdf. 011, exp. digital):

- Señala el procedimiento establecido por Colpensiones para el cumplimiento

de las sentencias.

- Afirma que la acción de tutela no puede ser usada como mecanismo para exigir el cumplimiento de las sentencias judiciales, tal y como en reiterada jurisprudencia lo ha señalado la Corte Constitucional.
- A su turno señala que la exigibilidad para el cumplimiento de la decisión judicial, de conformidad con lo reseñado en el artículo 307 del Código General del Proceso, se da transcurridos 10 meses a la ejecutoria de la misma.
- Finalmente, sustentado en lo anteriormente señalado, solicita declarar la improcedencia del trámite constitucional.

CONSIDERACIONES

La acción de tutela se estableció como un mecanismo para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia y, la misma fue reglamentada en el Decreto 2591 de 1991, que señaló las reglas básicas de su aplicación. Es así como el artículo 6° de dicha normativa delimitó su procedencia para situaciones en las cuales no existieran recursos o mecanismos judiciales ordinarios salvo que fuera interpuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no obsta para que se analice en cada caso si el procedimiento correspondiente resulta eficaz de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas.

PROBLEMA JURÍDICO corresponde al despacho resolver lo siguiente:

¿Existe vulneración de los derechos fundamentales del actor, con la omisión de Colpensiones, en dar respuesta de fondo a su petición de cumplimiento de sentencia? ¿Cuenta la administradora colombiana de pensiones -Colpensiones- con el término de 10 meses para dar respuesta a la solicitud de cumplimiento de sentencia judicial presentada por el ciudadano?

DERECHO DE PETICIÓN

El artículo 23 de la Constitución Política consagra como derecho fundamental de petición, aquel que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, dicha norma está reglamentada por los artículos 13 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificados por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, así: *"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma"*.

Así mismo, dicha normatividad desarrolla el derecho de petición en su artículo 14, señalando que como regla general toda petición debe resolverse en el término de 15 días hábiles, exceptuando las peticiones de documentos e información que deben resolverse en 10 días y las consultas, las cuales tienen prescrito un término de 30 días; y que, cuando no fuere posible resolverla en dicho término, deberá informarse de inmediato lo pertinente al interesado (antes del vencimiento del término señalado en la ley), exponiéndole las razones del caso y dándole a conocer el término razonable para resolverla, el cual no podrá exceder del doble del término inicialmente previsto. Sobre el tema el Tribunal Constitucional colombiano ha señalado que las autoridades peticionadas deben informar los inconvenientes y el tiempo en que se dará respuesta cuando no se pueda resolver en el plazo establecido: *"En relación con el término legal para suministrar respuesta, esto es, el plazo que tiene la administración o el particular para resolver las peticiones formuladas, debe consultarse al artículo 14° de la ley 1437 de 2011 que señala el término de quince días para*

dar respuesta a la petición. *"Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción". De no ser posible, antes de que se cumpla con el plazo allí dispuesto y ante la imposibilidad de suministrar la contestación en dichotérmino, la autoridad o el particular deberán explicar los motivos y señalar una nueva fecha en el cual se realizará. Para este efecto, el criterio de razonabilidad será determinante, ya que es imperioso tener en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud".* (Sentencia T-369 de 2013).

Aunado a ello, en pronunciamiento posterior, la Corte mediante la sentencia T- 903 de 2014 indicó que: *"(...) la jurisprudencia constitucional ha entendido que cuando se trata de salvaguardar el derecho fundamental de petición, el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz distinto de la acción de tutela, motivo por el cual quien resulte afectado por la vulneración de este derecho puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional".* Así las cosas, se tiene que, no existiendo otro instrumento judicial para proteger el derecho de petición, por tratarse de un derecho fundamental cuya aplicación es inmediata, el mecanismo más adecuado es la acción de tutela.

Por otra parte, la honorable Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha considerado que el elemento esencial del mismo radica en la resolución pronta y oportuna por parte de la autoridad a quien se dirige la solicitud y en el derecho que le asiste al solicitante a obtener una respuesta de fondo, independientemente de que el sentido de la decisión sea positivo o negativo. Así entonces, luego de nada serviría dirigirse a una autoridad en particular con la esperanza de una respuesta pronta y eficaz, si ésta no resuelve dentro de los términos legales, o, cuando a pesar de hacerlo el contenido de la respuesta es vago, impreciso o se reserva el sentido de la decisión.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional el núcleo esencial de este derecho reside en *i)* una resolución pronta y oportuna; *ii)* una respuesta de fondo, lo que implica que sea clara, precisa, congruente y consecuente; y *iii)* la notificación al peticionario (T-154 de 2018):

(i) Resolución pronta y oportuna. Es una obligación de las autoridades y de los particulares responder las peticiones en el menor tiempo posible, sin exceder el término de 15 días hábiles establecido en la ley, salvo excepciones legales.

(ii) Respuesta de fondo o material, requisito que se cumple siempre que la contestación sea: a) clara, esto es, que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; b) precisa, de manera que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; c) congruente, es decir, conforme con lo solicitado; y d) consecuente con el trámite en el que la solicitud es presentada".

(iii) Notificación de la decisión. Este requisito se satisface poniendo en conocimiento del ciudadano la respuesta de la autoridad o del particular, pues de ello se deriva la posibilidad del peticionario de presentar la respectiva impugnación.

En el tema particular de las solicitudes relacionadas con derechos pensionales, la Sentencia SU-975 de 2003 señaló que las autoridades deben tener en cuenta tres (3) términos que corren transversalmente, cuyo incumplimiento acarrea una transgresión al derecho de petición. Al respecto indicó:

i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional – incluidas las de reajustes- en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste en un término mayor a los 15 días, situación de la deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo la petición y por qué no le es

posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo.

ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional, contados a partir de la presentación de la petición.

iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001".

No obstante lo anterior, el Decreto 491 de 2020, en su artículo 5 (declarado condicionalmente exequible mediante sentencia C-242 de 2020) estableció:

"...Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales..."

Siendo del caso mencionar que debido a la actual condición sanitaria mundial, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, el gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, ecológica y social en todo el territorio, y a la par, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó a través de la Resolución 1315 del 27 de agosto de 2021 la emergencia sanitaria declarada, hasta el 30 de noviembre de 2021. Esto significa que mientras la emergencia sanitaria se encuentre vigente, las peticiones presentadas dentro de ésta, o que se encuentren en curso, por regla general deberán ser resueltas dentro de los 30, 20 o 35 días siguientes a su recepción, dependiendo el caso.

CASO CONCRETO:

Frente a los hechos que sirvieron de fundamento a la presente acción constitucional, este despacho judicial advierte lo siguiente:

Se encuentra acreditado que el señor Pedro Antonio Castellanos Rodríguez por intermedio de apoderado judicial interpuso derecho de petición ante Colpensiones el pasado 22 de abril de 2021, (pág. 5 y 6, pdf 003 del expediente digital), en los siguientes términos:

- i) *"...me permito solicitar, ordene a quien corresponda DAR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2018, PROFERIDA POR EL JUZGADO CUARENTA Y NUEVE (49) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Y MODIFICADA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUB SECCIÓN "F" DE FECHA 6 DE MARZO DEL 2020, por medio del cual se CONDENÓ a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, a reliquidar la pensión de vejez al señor PEDRO ANTONIO CASTELLANOS RODRÍGUEZ, cuyo cumplimiento se deje reflejar mediante la inclusión en nómina..."*

Al respecto, la accionada Colpensiones en el informe rendido afirma que la solicitud de amparo debe declararse improcedente comoquiera que el accionante no acreditó la vulneración a derecho fundamental alguno, así como tampoco acredita la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez de tutela, finalmente, aduce que de conformidad con lo establecido en el artículo 307 del Código General del Proceso, no es posible solicitar el cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado 49 Administrativo del Circuito de Bogotá, modificada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como quiera que no han transcurrido los 10 meses de que trata la norma en cita.

Frente a lo anterior, se tiene que el señor Pedro Antonio Castellanos solicitó la protección del derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por la Administradora Colombiana de Colpensiones toda vez que no ha resuelto la petición del 22 de abril de 2021.

El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna, es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su competencia, debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión sea o no favorable al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la falta de competencia para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición presentada no significa que el destinatario quede exento de pronunciarse. El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la vulneración del derecho de petición.

En el sub examine, si bien Colpensiones rinde informe, el mismo se limita a indicar el procedimiento que debe adelantar para dar cumplimiento a los fallos judiciales, sin siquiera pronunciarse acerca de la petición elevada por el accionante el 22 de abril de 2021, menos aún demuestra haber dado respuesta a tal solicitud y notificado la misma en legal forma al ciudadano.

En virtud de lo anterior este Despacho Judicial considera que le ha sido vulnerado el derecho fundamental de petición al señor Pedro Antonio Castellanos Rodríguez, al encontrarse acreditada la radicación de su solicitud hace más de treinta (30) días, sin que Colpensiones hubiera probado haber dado respuesta de fondo a lo petitionado y haber notificado al ciudadano en legal forma lo decidido.

Así las cosas habiendo transcurrido un término superior a los treinta (30) días con que contaba Colpensiones, para dar respuesta de fondo a la solicitud presentada por el actor por intermedio de apoderado judicial el pasado 22 de abril del año en curso, se ordenará a COLPENSIONES – Gerencia de determinación de derechos o a la dependencia encargada, que en un término de cinco días (5) siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a dar respuesta de fondo a lo solicitado por el actor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia y le notifiquen en legal forma la decisión adoptada, so pena de dar aplicación a las sanciones establecidas en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.

DECISIÓN

En mérito de anteriormente lo expuesto, la Juez Cuarenta Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad constitucional,

RESUELVE:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Pedro Antonio Castellanos Rodríguez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a COLPENSIONES – Gerencia de determinación de derechos o dependencia encargada que en un término de cinco días (5) siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a dar respuesta de fondo a lo solicitado por el actor en petición presentada el 22 de abril de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia y a notificarle en legal forma su contenido.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito, del contenido de esta sentencia.

TERCERO: Si este fallo no fuere Impugnado, **REMÍTASE** el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual Revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUISA FERNANDA NIÑO DÍAZ

Juez
GMG

Firmado Por:

Luisa Fernanda Niño Diaz

Juez

Laboral 040

Juzgado De Circuito

Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

a9abc31034af5bb4ec1e258f0bf3be64fab435c415bf81b4a4ae5afe8abdd33f

Documento generado en 06/09/2021 10:13:28 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>